

TEMAS ECONÓMICOS

Experimento desastroso

La debacle de la economía estuvo en el centro de la tumultuosa experiencia de la UP. La incapacidad del Presidente Allende para conducir una coalición radicalizada contribuyó a los desaciertos. Su programa apuntaba a una transformación estructural con inconsistencias evidentes.

El gobierno de Salvador Allende fue el corolario extremo de un período caracterizado por altos niveles de inflación, crisis de balanza de pagos y un moderado crecimiento. Discutidas reformas estructurales, como la "chilenización" de la gran minería del cobre o la reforma agraria de la administración Frei Montalva, pavimentaron el camino para cambios aún más radicalizados. En cifras, durante el período 1965-70, el crecimiento promedio anual había sido de 3,9%. Por su parte, la inflación alcanzó el 28% en 1968, 29% en 1969 y 36% en 1970, en un contexto marcado por un creciente número de huelgas (más de 1.000 durante 1969).

Los equipos técnicos tras el programa de la Unidad Popular definieron una agenda que pretendía abordar cuatro puntos críticos. En primer lugar, la

corrección de supuestos grados de concentración que daban un carácter monopolístico a la economía. Segundo, terminar con la dependencia exterior de Chile, atribuida al rol de los capitales extranjeros. Tercero, redistribuir la riqueza, según un diagnóstico que apuntaba contra una élite "oligárquica". Y, finalmente, revertir el sistema capitalista, responsable último de todo aquello.

En función de lo anterior, profundas y radicales reformas estructurales, el crecimiento del gasto público y la expansión del Estado para aprovechar supuestas holguras productivas, y medidas para controlar la inflación fueron parte de la base de la política de la UP. Los errores e inconsistencias de ese plan terminarían condenando en el corto plazo el desempeño económico de la administración Allende.

La equivocada estrategia para enfrentar la inflación fue quizás el más evidente de los errores: se pensó que un tipo de cambio fijo y el control de precios a nivel local, sumado al control estatal del aparato productivo y de comercialización, serían suficientes para reducir el flagelo. Todo, acompañado de un importante reajuste de los salarios nominales (por sobre el 40%) que, se asumía mecánicamente, activaría la demanda y fomentaría el aprovechamiento de las holguras productivas. No había conciencia del impacto que tendrían un aumento de la oferta monetaria (por sobre el 100% en 1971), la expansión de los gastos nominales del gobierno (por sobre el 60%) y los problemas de gestión del Estado. ¿El resultado? La inflación fue de 22% en 1971, 260% en 1972 y 605% en 1973.

Reformas estructurales en contra de la propiedad

Pieza central de la agenda era la nacionalización total de la gran minería del cobre, aprobada por una insólita unanimidad del Congreso. El costo reputacional en el exterior fue gigantesco, sobre todo luego de que el Presidente utilizara su facultad para reducir las compensaciones a los propietarios extranjeros, aduciendo el cálculo de "utilidades excesivas" (en la práctica, los más grandes no recibieron nada). Durante los primeros meses de 1971 se extendió también el control del Estado sobre las minas de hierro, salitre y carbón.

La profundización de la reforma agraria fue otro pilar. Hacia 1973 se ha-

bían expropiado en torno a 10 millones de hectáreas, el 60% de la tierra agrícola nacional. El resultado del proceso, caracterizado por la violencia y las fallas de gestión, fue la caída de la producción agrícola.

También se buscó la estatización de la banca. Para esto, muchas veces se adujeron supuestas irregularidades financieras o problemas laborales que impedían el funcionamiento de una determinada entidad, de modo de facilitar la adquisición de castigadas acciones. Así, en 1973, ya 14 de 17 bancos eran administrados por el Estado vía Corfo.

La industria corrió igual suerte. La creatividad estatizadora de la administración Allende aprovechó el Decreto con Fuerza de Ley 520, de 1932 (promulgado por la efímera "república socialista" de ese año), para tomar el control de industrias. A esto se sumó la utilización de cualquier disputa laboral y la acción de la Dirección Nacional de Industria y Comercio (Dirinco) para desestabilizar financieramente a las empresas, forzando a los dueños a vender. En septiembre de 1973, el Estado tenía el control de más de 500 empresas.

Acumulación de desequilibrios

Con un déficit presupuestario que alcanzaba casi el 10% del producto, una base monetaria expandiéndose por 100%, el desplome de las reservas internacionales, una balanza comercial deficitaria, la caída de la inversión bruta (-2,3%), salarios nominales aumentando injustificadamente y las primeras señales de escasez, los últimos meses de 1971 auguraron el oscuro pano-

rama para 1972. La economía decrecería -0,1% ese año, la inflación se multiplicaría más de 10 veces y los salarios reales caerían más de un 10%. Haciendo caso omiso a las advertencias, las autoridades insistieron en la estrategia equivocada, agudizando el colapso: la economía cayó un 4,3% en 1973, mientras la inflación más que se duplicó (llegó al 605%) y los salarios reales

cayeron nuevamente cerca del 40%.

Tales números ofrecen una síntesis económica de esos años. La reflexión sobre las consecuencias de las equivocadas visiones impulsadas sigue siendo actual. Más aún cuando sectores del oficialismo como el PC mitifican ese período y lo califican, de modo inquietante, como un "proyecto inconcluso" y vigente.